

Documento de Cooperación Técnica

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	CHILE
▪ Nombre de la CT:	Apoyo a la Agenda de Integridad Pública y Transparencia de Chile
▪ Número de CT:	CH-T1239
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Jarquín Ramos, María José (IFD/ICS) Líder del Equipo; Dassen, Nicolás (IFD/ICS) Jefe Alternativo del Equipo de Proyecto; Casalino Franciskovic, Juan Manuel (LEG/SGO); Catano Guzmán, Mariana (IFD/ICS); Fitzpatrick, Silvana Valdivieso (IFD/ICS); González, Jorge Luis (VPC/FMP); La Rosa, Analía (VPC/FMP); Manzur Madariaga, Michelle (IFD/ICS); Nunez Salinas, Alexander (IFD/ICS); Reyes Aburto, Francys Britania (CSC/CCH); Rivera, Katia (IFD/ICS); Vilches Herrera, David Ignacio (CSC/CCH)
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente
▪ Operación a la que la CT apoyará:	.
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	20 Abr 2020.
▪ Beneficiario:	República de Chile – Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES)
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Fondo de Transparencia(AAF); Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones(INS)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	Transparency Trust Fund (AAF): US\$50,000.00 OC Strategic Development Program for Institutions (INS): US\$100,000.00 Total: US\$150,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	24 meses
▪ Fecha de inicio requerido:	Julio 2020
▪ Tipos de consultores:	Firmas y consultores individuales, nacionales e internacionales.
▪ Unidad de Preparación:	IFD/ICS-División de Innovación para Servir al Ciudadano
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	CSC/CCH-Representación Chile
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	S
▪ CT incluida en CPD (s/n):	S
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Capacidad institucional y estado de derecho

II. Objetivos y Justificación de la CT

II.1 La Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), a través de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia (La Comisión), tiene como objetivo principal asesorar al Presidente de la República “en materias de integridad pública, probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública y, por su intermedio, a los distintos órganos de la Administración del Estado”¹. Para el cumplimiento de sus funciones, La Comisión juega el rol de coordinar a los distintos Órganos de la Administración del Estado en el cumplimiento de las normas relativas

¹ Creada mediante Decreto No. 14 de septiembre de 2018.

a ambas materias, analizando y proponiendo actualizaciones y modificaciones tanto legales como administrativas; e impulsando la adhesión de Chile a estándares e instancias internacionales, como por ejemplo la Alianza de Gobierno Abierto (AGA), y el desarrollo de otro tipo de actividades comprometidas en los diferentes instrumentos de política que el Gobierno defina. Recientemente (2020), La Comisión pasó a cumplir el rol de Secretaría Técnica de la Red de Lenguaje Claro Chile; tarea desde la cual aspira a promover un lenguaje más comprensivo.

- II.2 El fortalecimiento de la integridad y la transparencia es una condición indispensable para asegurar una correcta administración de los recursos públicos. En este sentido, el Gobierno de Chile, a través de los años, ha desarrollado una legislación capaz de prevenir y sancionar prácticas efectuadas en el contexto de eventos de corrupción que pusieron de manifiesto vacíos legales e institucionales de necesaria y pronta atención. En razón de lo anterior, en las últimas décadas se han promulgado las siguientes leyes y modificaciones legales, en orden a velar por la correcta observancia de los principios de probidad y transparencia: Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (2001), Ley de Compras Públicas (2003) y su Reglamento (2015 y sucesivas modificaciones, siendo la de 2020, la más reciente); Ley de Procedimientos Administrativos (2003); Ley que Establece el Sistema de Alta Dirección Pública (2003) y su perfeccionamiento (2016); Ley de Transparencia de la Función Pública y de acceso a la información de la Administración del Estado (2008); Ley de Participación Ciudadana (2011); Ley que regula el Lobby (2014) y Ley de Probidad (2016), entre otras medidas legislativas y administrativas.²
- II.3 A pesar del avance antes señalado es importante destacar que, desde el año 2012, Chile ha registrado un notable descenso en su puntuación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. Así las cosas, en el año 2019 obtuvo una puntuación de 67, en comparación a 72 del año 2012³. Según el *Global Corruption Barometer*, en 2019, 54% de los chilenos consideraban que la corrupción había aumentado en el país. Este desempeño puede explicarse por múltiples factores. En materia de **transparencia y acceso a la información pública** se ha identificado la necesidad de fortalecer a la unidad encargada de promover las políticas de transparencia e integridad en la administración central, dotándola de mayor voz y capacidad para articular a los distintos órganos públicos que la componen (actualmente La Comisión y su correspondiente Secretaría en SEGPRES); y en esta línea fortalecer la participación de Chile en instancias como la AGA⁴, en tanto mecanismo para el logro de dicho objetivo. Por otra parte, si bien la actual Ley de

² Entre 2015 y 2017, el Banco apoyó un conjunto de reformas impulsadas por el Gobierno de Chile en el marco de la Agenda de Probidad y Transparencia (APT). Dos de estas reformas distinguen al país dentro de la región: (i) fortalecimiento del marco legal e institucional de la integridad para prevención, control y sanción, de enriquecimiento ilícito y conflictos de intereses en la gestión pública; a partir de la promulgación de la “Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses” (Ley No. 20.880); y (ii) perfeccionamiento, como un sistema profesional y de mérito, del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) y fortalecimiento de las facultades de la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC); a partir de la promulgación y aplicación, de la Ley que “Perfecciona al Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) y Fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC)” (Ley No. 20.955).

³ La escala del IPC va de 0 = muy corrupto a 100 = muy limpio.

⁴ Informe del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción (2015).

Transparencia⁵ es valorada positivamente⁶, se encuentra en trámite legislativo un proyecto de Ley⁷ para modificar aspectos que aún se perciben como perfectibles en función de extender su aplicación a otros poderes del Estado, a saber, poder legislativo y judicial, así como a otros órganos con autonomía constitucional⁸; la literatura destaca la importancia de que la información que se provee sea clara y comprensible, habilitadora de una relación positiva entre ciudadanía y servicios públicos⁹.

- II.4 En materia de **conflictos de intereses**, Chile ha logrado avances, particularmente en lo referido a la interferencia de intereses privados que servidores públicos pudiesen enfrentar en el ejercicio de su función pública. Sin embargo, aún hay margen para robustecer el marco legal e institucional, de conformidad con estándares internacionales como los utilizados por la OCDE, particularmente en lo que refiere a inhabilidades e incompatibilidades y puerta giratoria, así como a lobby y gestión de intereses¹⁰. En este orden de ideas el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial reporta, para 2018 y 2019, un puntaje de 7.0¹¹ en cuanto a regulación de conflictos de intereses, evidenciando un espacio de mejora; de aquí también la actual tramitación legislativa en que se encuentra el Proyecto de Ley que Fortalece la Integridad Pública¹² que, entre otros, atiende los primeros desafíos antes anotados en materia de inhabilidades e incompatibilidades y puerta giratoria, complementándose con el fortalecimiento del actual marco institucional de la Ley que regula el Lobby¹³ para una mejor gestión de las obligaciones derivadas de ésta; asimismo, se suma a estas medidas la creación de un registro único y centralizado de Beneficiarios Finales^{14, 15}.

⁵ Ley No. 20.285 de Transparencia de la Función Pública y de acceso a la información de la Administración del Estado.

⁶ El *Right to Information Rating* señala que la Ley es fuerte en varios frentes, incluyendo procedimientos razonablemente claros, buenas reglas sobre tarifas de acceso y estructura; y le otorga un puntaje de 94 de un máximo de 150. <https://www.rti-rating.org/country-data/Chile/>

⁷ Boletín N° 12.100-07 con Mensaje del Presidente de la República N° 108-366.

⁸ [Global Right to Information Rating](#)

⁹ (i) Poblete, Claudia y Fuenzalida, Pablo (2017). "Una mirada al uso del lenguaje claro en el ámbito judicial latinoamericano"; Guía de Lenguaje Claro: ¿Cómo podemos generar una comunicación simple, clara y efectiva entre el Estado y la ciudadanía? - Laboratorio de Gobierno de Chile, 2020. Strandvik, Ingemar. "La modernización del lenguaje jurídico en Suecia: ¿enseñanzas aplicables a otras tradiciones?", en Montolio, Estrella (ed.). *Hacia la modernización del discurso jurídico*. Universitat de Barcelona (2011).

¹⁰ [Observatorio Anticorrupción](#)

¹¹ El puntaje va de 0 a 10, siendo 10 lo mejor.

¹² Boletín N° 11.883-06 con Mensaje del Presidente de la República N° 061-366.

¹³ Ley N° 20.730.

¹⁴ En el contexto del IV Plan de Acción de Chile ante la Alianza para el Gobierno Abierto, la Unidad de Análisis Financiero, está trabajando en "Construir colaborativamente una propuesta de política sobre creación de un registro de dueños reales (beneficiarios finales - BF) de empresas" en conjunto a Servicio de Impuestos Internos, Contraloría General de la República, Dirección de Compras Públicas y Ministerio Secretaría General de la Presidencia, entre otros.

¹⁵ Según la Circular 57/2017 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Chile ha avanzado significativamente en materia de identificación y verificación de los beneficiarios finales de las personas y estructuras jurídicas. Sin embargo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) observa que - respecto a las recomendaciones 24 y 25 sobre Beneficiarios Finales- no existe todavía un Registro Único de Comercio a nivel nacional, donde se pueda obtener toda la información de las personas jurídicas en forma digital y acceder a información por persona física o jurídica.

- II.5 Lo antes anotado, en sintonía con el análisis y recomendaciones de recientes estudios¹⁶, sugiere la existencia de espacios de mejora. A lo anterior se suma que, en tiempos de emergencia, es imprescindible combinar respuestas rápidas en un marco de debida diligencia, integridad y transparencia.
- II.6 Atendiendo a esta realidad, la transparencia es un eje transversal del [Programa de Gobierno 2018-2022](#). Para la construcción de un Estado transparente y abierto, se plantea el fortalecimiento de la probidad, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana; particularmente en materias referidas al tránsito entre el sector público y el privado, según estándares de la OCDE en materia de prevención de los conflictos de interés, sanciones y penas respecto a los delitos de soborno y cohecho, y de transparencia en todos los órganos estatales autónomos, entre otros. A partir de esto, SEGPRES ha venido trabajando en dos grandes líneas de acción; en primer lugar, liderando la formulación y coordinación de la implementación de los compromisos del país ante la AGA¹⁷. En segundo lugar, articulando la “[Agenda de Integridad Pública y Transparencia. Hoja de Ruta 2019-2022](#)”¹⁸ que el Presidente de la República presentó en septiembre de 2019. A lo anterior, se suma la [Agenda de Modernización del Estado](#)¹⁹ y la [Agenda Anti-Abusos](#)²⁰, presentadas en julio y diciembre de ese mismo año, respectivamente; así como la necesidad de atender las demandas ciudadanas y [recomendaciones de mitigar los riesgos de corrupción en las compras y contrataciones públicas durante la emergencia declarada por el COVID-19](#).
- II.7 En este contexto, el Gobierno de Chile ha solicitado el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID o Banco), a partir de un esquema similar al otorgado en años anteriores para estos temas²¹. Ver Carta de SEGPRES en Anexo I.

¹⁶ Ejercicio propio de SEGPRES de mapeo de reformas vis a vis propuestas del Consejo Asesor; y compromisos internacionales (2019); “Reformas anticorrupción en Chile 2015-2017. Cómo se hizo para mejorar la Democracia” (Fundación Konrad Adenauer y Espacio Público. 2019); y “Hacia una Nueva Agenda de Probidad” (BID, Espacio Público y SEGPRES. 2017)

¹⁷ En enero de 2019, el Gobierno de Chile formalizó el [IV Plan de Acción de Gobierno Abierto](#). A través de la RG-T2822, el BID apoyó la formulación de éste de forma co-creativa y colaborativa. El IV Plan se extiende hasta diciembre de 2020 y en paralelo, en el II semestre del mismo año, el Gobierno de Chile deberá informar a la AGA sobre el avance y logro del IV Plan; y formular y presentar ante ésta, el V Plan.

¹⁸ Esta precisa y amplía el alcance de las acciones que, en materia de transparencia, probidad y control, y participación ciudadana, se definen en la [Agenda de Modernización del Estado](#) (Julio 2019).

¹⁹ Esta agenda, bajo el eje de “Transparencia, Probidad y Participación”, plantea: (i) avanzar con el proyecto de Ley de Transparencia 2.0 que propone aumentar los sujetos obligados a dar cuenta de manera activa sobre su gestión (se sumarían 411 instituciones) y elevar las obligaciones y exigencias a instituciones clave para la democracia, como el Congreso Nacional, el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República; y (ii) avanzar con la tramitación legislativa del proyecto de Ley de Integridad Pública que establece inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio de la función pública y regula el tránsito entre el sector público y el privado.

²⁰ Esta agenda busca garantizar un trato justo a todos los ciudadanos, combatir con eficacia todo tipo de abusos y proteger la dignidad de todos los ciudadanos. En materia de anti abusos contempla un proyecto de ley Anti-Colusión que propone aumentar las penas de cárcel para los casos de colusión en bienes o servicios de primera necesidad; de ley Anticorrupción para crear un canal de denuncias reservadas en la Contraloría General de la República y entregar protección especial a denunciantes; y de ley que promueva mayor transparencia en compras públicas mediante obligación, para todas las empresas proveedoras del Estado, de informar quiénes son las personas naturales dueñas de las sociedades que contratan con el Estado.

²¹ El apoyo del Banco a la Agenda de Probidad y Transparencia de Chile, entre 2015 y 2017, se estructuró bajo la modalidad de Préstamo Programático de Apoyo a Reformas de Política (PBP) con dos operaciones individuales y secuenciales: CH-L1110 (3617/OC-CH) y CH-L1111 (3748/OC-CH); que se complementó con una cooperación técnica no reembolsable por (CH-T1166, ATN/AA-15550-CH) a fin de apoyar la formulación e implementación de algunas de las medidas.

- II.8 **Objetivo.** El objetivo general de esta CT es contribuir a los esfuerzos del Gobierno de Chile por continuar en el proceso de fortalecimiento y consolidación del marco legal e institucional de prevención y control de la corrupción y de promoción de la transparencia.
- II.9 **Alineación estratégica.** Esta CT es consistente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3190-2), en particular, en su eje transversal de Fortalecimiento Institucional y Estado de Derecho, en cuanto a las actividades de promoción de transparencia e integridad. La CT además está alineada con la Estrategia Sectorial sobre las Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social (GN-2587-2), en lo que refiere a la lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia (párrafo 5.49). La CT también está alineada con las tres líneas de acción definidas en el Marco Sectorial de Transparencia e Integridad (GN-2981), a saber, aquellas que buscan incrementar el acceso a la información y facilitar el control y la demanda ciudadana, y las que buscan promover la integridad en el sector público y en el sector privado. Asimismo, se alinea con el apoyo a reformas institucionales y regulatorias para mejorar la transparencia y la integridad que ofrece el Fondo de Transparencia (AAF), en particular, con sus áreas estratégicas de integridad financiera y de gobierno abierto; y con el objetivo (iv) del Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones financiado con Capital Ordinario (INS) (GN-2891-1) de lucha contra la corrupción, mediante resultados esperados de esta CT en materia de fortalecimiento de sistemas nacionales para la implementación de políticas de integridad y transparencia. Finalmente, el programa se alinea con la Estrategia del Banco en Chile para 2019-2022 (GN-2946), específicamente con el objetivo estratégico de simplificar los trámites del Estado para los ciudadanos.

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- III.1 Específicamente, la CT, permitirá elaborar estudios, generar instrumentos de gestión, y desarrollar actividades de sensibilización y capacitación, que habiliten la implementación de un conjunto de acciones de política, de mediano a largo plazo y gradual implementación, que el Gobierno de Chile ha venido definiendo en los últimos dos años en el marco de los instrumentos anotados en el ¶II.6. Cabe destacar que algunas de éstas, tal como las referidas a beneficiario final en el marco de las compras públicas, contribuirán directamente a mitigar los riesgos asociados a la emergencia sanitaria declarada en el marco de la pandemia del coronavirus. Para el logro de los objetivos de esta CT se han definido dos componentes que se describen a continuación.
- III.2 **Componente I. Mejora de servicios al ciudadano y del acceso a la información para un control social más efectivo (US\$66.000).** Este componente contribuirá al fortalecimiento del trabajo de La Comisión y su Secretaría, tanto en materia de integridad pública, probidad y transparencia, como de defensa y promoción de los derechos de los ciudadanos, a través del financiamiento de asistencia técnica para el desarrollo de las siguientes actividades: (i) integración y priorización del conjunto de acciones en materia de integridad y transparencia definidas en los distintos instrumentos de planificación del Gobierno (¶II.6) en un plan único y comprensivo, con su respectiva hoja de ruta, de fortalecimiento y consolidación de los sistemas nacionales de integridad y transparencia, sobre la base de la continuidad de las políticas que Chile ha impulsado en las últimas tres décadas; (ii) elaboración, mediante el proceso participativo y colaborativo indicado por la AGA, del V Plan de Acción de Gobierno Abierto y de seguimiento de los compromisos pendientes del IV

Plan²² y los nuevos que se adopten; (iii) elaboración de un Glosario para la Administración Pública en temas de Transparencia, Probidad e Integridad, que contenga términos de uso recurrente y sugerido en Lenguaje Claro²³, unificando y dando consistencia de contenido y forma a la disponibilización tanto en plataformas de acceso a la información y transparencia activa, así como en la configuración y estructuración de las respuestas a Solicitudes de Acceso a la Información Pública en el marco de la Ley; y (iv) facilitación de la creación de una red de funcionarios de integridad pública que agrupe a los encargados institucionales de transparencia, gobierno abierto, declaraciones de intereses y patrimonio, compras públicas, auditoría interna, control de gestión, códigos de ética y lobby, como grupo focalizado para capacitación periódica y foro para compartir buenas prácticas, a fin de promover la cultura de probidad y transparencia en la función pública²⁴. Adicionalmente, la CT financiará actividades varias de capacitación, sensibilización y socialización en torno a los principales entregables de estas actividades, particularmente en lo referido a lenguaje claro.

III.3 Componente II. Prevención de conflictos de interés (US\$74.000). En el marco de este componente se busca apoyar el diseño y/o desarrollo de mecanismos tendientes a prevenir y a resolver la existencia de conflictos de intereses, orientados a solucionar potenciales situaciones en que intereses privados, de cualquier tipo, ya sea de autoridades, funcionarios o de terceros relacionados a éstos (por ejemplo, proveedores del Estado), pueden afectar, de manera favorable o desfavorable, el ejercicio de la función pública. Para lo cual, la CT financiará las siguientes actividades: (i) asistencia técnica para la actualización (diseño de mejoras) de la actual plataforma de Lobby²⁵ (Portal de Lobby 2.0), herramienta centralizada de publicación de las obligaciones de Transparencia Activa incorporadas en la Ley y su reglamento, a la luz de importantes cambios al interior de los organismos públicos en la gestión de audiencias, viajes y donativos, acontecidos a lo largo de los cinco años desde la entrada en vigencia de la Ley; y (ii) asistencia técnica para el desarrollo, en línea con el “Manual sobre beneficiarios finales” elaborado por BID-OCDE (2019), de una Guía para la implementación de la normativa sobre beneficiarios finales en Chile y de una propuesta de diseño de registro de beneficiario final²⁶. Adicionalmente, la CT financiará actividades varias de capacitación, sensibilización y socialización en torno a los principales entregables de estas actividades; tales como seminarios sobre Lobby y Beneficiario Final, y talleres con usuarios de la guía y registro de Beneficiario final, tal como la Unidad de Análisis Financiero y ChileCompra.

III.4 Presupuesto indicativo. El presupuesto total de la CT será US\$150,000, el monto total de financiamiento por IDB requerido por componente se financiará con US\$50,000 de recursos AAF, y US\$100,000 de recursos del capital ordinario para el INS.

Presupuesto Indicativo

²² Por ejemplo, uno de los compromisos todavía pendientes del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto, al cual se le dará seguimiento en el marco de esta CT, es el N°11 “Construir colaborativamente una propuesta de política sobre creación de un registro de dueños reales (beneficiarios finales – BF) de empresas”, a cargo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

²³ Según la ISO/TC 37.

²⁴ Chile cuenta con la [Red de Innovadores Pública](#) como referente nacional de buena práctica.

²⁵ [Plataforma Ley del Lobby](#)

²⁶ Actividad conjunta SEGPRES-UAF-BID.

Actividad / Componente	Descripción	INS	AAF	Financiamiento Total
Componente I. Mejora de servicios al ciudadano y del acceso a la información para un control social más efectivo	Consultorías para asistencia técnica, organización de talleres, eventos de capacitación y sensibilización, documentación y publicación	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
Componente II. Prevención de conflictos de interés	Consultorías para asistencia técnica, organización de talleres, documentación y publicación.	\$24,000.00	\$50,000.00	\$74,000.00
Otros	Estudio de evaluación final del Proyecto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
Total		\$100,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00

IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

IV.1 El organismo ejecutor de todos los componentes será el Banco, a través de la División de IFD/ICS (Capacidad Institucional del Estado). Todos los trámites administrativos y de supervisión técnica serán responsabilidad de IFD/ICS en coordinación con la Secretaría Técnica de La Comisión. El equipo de ICS contratará las consultorías, organizará las actividades y supervisará los productos desarrollados en beneficio de SEGPRES. La coordinación con SEGPRES, a través de Secretaría Técnica de La Comisión, se llevará a cabo a través de reuniones de coordinación técnico-administrativas y de la revisión conjunta de los términos de referencia y evaluaciones de los informes técnicos. El Banco desempeñará el rol de ejecutor de la CT respondiendo al pedido del Gobierno de Chile que ha indicado su acuerdo con este arreglo de ejecución, debido a la experiencia y conocimiento acumulados por el Banco en el desarrollo de estos temas en la región; la necesidad de iniciar las actividades prontamente en cuanto los entregables que resulten de la misma hacen parte de las acciones de política que el Gobierno está considerando comprometer ante el Banco en el contexto de una posible operación de préstamo (PBL) en pipeline 2021 A y, la SEGPRES, por su perfil de ente regulador y coordinador de la política sectorial, adolece de la capacidad operativa para ejecutarlo en los plazos requeridos y bajo las políticas del Banco; y dada la multiplicidad de agencias involucradas en este proyecto, lo cual requiere de una diligente y eficiente gestión de los recursos humanos y financieros para la realización de las distintas actividades previstas en esta CT. Todo lo anterior, en consistencia con las Guías Operativas de la CT (GN-2629-1).

IV.2 Las actividades a ejecutar bajo esta operación, se realizarán de acuerdo a los métodos de adquisición establecidos por el Banco, a saber: 20.(a) Contratación de personas consultores, según lo establecido en AM-650, (b) Contratación de firmas consultoras para servicios de una naturaleza intelectual, de acuerdo a la GN-2765-4 y su operativa asociada directrices (OP-1155-4), y (c) Contratación de servicios de logística y otros servicios que no sean de consultoría, de acuerdo con la política GN-2303-28. La única contratación directa indicada en el Plan de Adquisiciones, según la política respectiva, es decir la OP-1155-4 antes señalada, se prevé en cuanto a la misma requiere de conocimientos y experiencia muy específica sobre beneficiario final y las recomendaciones de la GAFI para ello, y tratándose de un valor de contrato menor.

V. Riesgos importantes

- V.1 Preliminarmente se identifican dos riesgos. El primer riesgo es la falta de compromiso por parte de los diferentes Servicios responsables directos de ejecutar las acciones de política que se definan para apoyo de ésta CT y del eventual PBP. Este riesgo se mitigará a través de una constante coordinación con SEGPRES con un seguimiento conjunto a las actividades. El segundo, es la posible falta de coordinación interministerial para la ejecución de las actividades de esta cooperación técnica. Para tal fin, se estará trabajando desde el inicio con todas las entidades involucradas para asegurar interés, articulación y apropiación desde el principio.

VI. Salvaguardias Ambientales

- VI.1 Dadas las características del proyecto no se esperan riesgos ambientales ni sociales negativos, por lo que la clasificación de esta operación, de acuerdo con los [Filtros de Salvaguardias Ambientales](#) (OP-703), es "C".

Anexos Requeridos:

[Solicitud del Cliente_9698.pdf](#)

[Matriz de Resultados_38407.pdf](#)

[Términos de Referencia_19352.pdf](#)

[Plan de Adquisiciones_11860.pdf](#)